

Entrevista a la delegación de paz de las Farc-EP

Iván D. Álvarez Tamayo

—¿Cómo transmitimos que lo que estamos haciendo aquí es valioso? ¿Cómo transmitimos que esta apuesta es, en últimas, la única posibilidad de construir un proyecto de nación a mediano y largo plazo? Ese es el reto.

Con esa frase parecía devolvernos la pelota Lucas Carvajal, integrante de las Farc-EP quien a pesar de su corta edad (claramente no alcanzaba los 35 años) hizo parte de la Delegación de Paz de esta organización que negoció en La Habana los Acuerdos de Paz con el gobierno de Juan Manuel Santos. Parecía devolvernos la pelota en medio de una entrevista que él mismo calificaría al final como “el examen de la Nacional [entre risas, no está de más mencionarlo]”.

Después de todo, imbuidos en el compromiso histórico de aportar a la conquista de la paz en Colombia y, cabe decirlo, intrigados ante un evento peculiar: la reorientación hacia la negociación sería de la confrontación entre uno de los estados más violentos y guerreristas del orbe y la más antigua organización revolucionaria alzada en armas del hemisferio occidental; resultaba inevitable llegar cargados de cuestionamientos de la más variada complejidad, impacientes por obtener respuestas.

El marco planteado por las negociaciones hizo ineludible su prioridad para un Comité Editorial comprometido en sostener, al igual que las más recientes ediciones de la Revista Kabái, una conexión estrecha entre temática y contexto sociohistórico, con el objetivo de acercar críticamente al estudiante autor y lector a problemáticas de

actualidad. Por esto nos dimos en el 2016 a la tarea de viajar a La Habana y entrevistar a las delegaciones de paz para conocer de primera mano cómo iba el cierre de cuatro argos años de negociación y profundizar sobre algunos puntos cruciales en el des-entrevolvimiento e implementación de lo pactado, además de transversales a la presente publicación.

Lejos de desanimarnos luego de ser absolutamente ignorados por la Delegación del Gobierno, debido quizás a nuestra “insignificancia”, vimos en la respuesta afirmativa de las Farc-EP una oportunidad para dialogar con una de las partes negociantes cuya posición, inaudible por efectos de la larga contrainsurgencia del establecimiento, poco se reproduce en los medios de comunicación. En consecuencia, lo que quisimos y queremos ofrecer a este respecto, no es más que servir como vía alternativa de comunicación frente a lo que fue, además de aquello que se conoció como Pedagogía de Paz, una de las deudas del proceso de negociación en materia de información: la comunicación efectiva, equilibrada y detallada no solo de la naturaleza y razones de los puntos acordados, sino también de las motivaciones, visiones, expectativas, reacciones y reservas de cada una de las partes. Y pues, para quien haya seguido el proceso, resulta evidente que solo una de las partes tuvo oportunidad de expresarse masivamente ante el pueblo colombiano.

Ante tales circunstancias, reproducimos a continuación algunos apartes de las entrevistas a Lucas Carvajal y Jesús Santrich,

seleccionados a partir de lo que consideramos puede seguir aportando al debate sobre un proceso que al momento en que se escribió este artículo, ya había dado paso a una implementación precaria.

Entrevista a Lucas Carvajal:

RK: ¿Cómo va a ser el tránsito de movimiento armado a movimiento político?

LC: Una vez los acuerdos parciales hayan sido logrados, pretendemos hacer un tránsito hacia la legalidad. Las Farc-EP no vamos a hacer una desmovilización, sino que cada combatiente pasará a ser un militante de un movimiento que construya convergencia, queremos salir a la palestra pública en conjunto con todas las resistencias, los movimientos sociales, los movimientos populares, construyendo convergencia y unidad por las reivindicaciones sociales.

RK: Luego de ese tránsito ¿El nuevo movimiento político deja por fuera el marxismo-leninismo, el bolivarianismo que los ha caracterizado y, por consiguiente, a los sectores de izquierda más radicales?

LC: Eso lo definirá la X Conferencia [para entonces no se había celebrado, pero ésta determinó la continuidad de tales principios políticos]¹, que es la instancia máxima de las Farc-EP. Pero aledaño al fundamento marxista-leninista y bolivariano, que es el horizonte ideológico bajo el que nos enmarcamos, y sin operar bajo el centralismo democrático, es decir, bajo un orden vertical

[característico de las organizaciones marxistas-leninistas], nosotros experimentamos desde el año 2000, la construcción del Movimiento Bolivariano por la Nueva Colombia cuyo funcionamiento fue amplio y clandestino. De esta apuesta hacemos un balance positivo: el Movimiento Bolivariano supo crecer durante los 8 años del gobierno reaccionario en cabeza de Álvaro Uribe, supo construir resistencias en las comunidades de base y alternativas amplias de poder popular. A partir de la valoración que hacemos del mismo, parte nuestra agenda política para el posacuerdo.

La X conferencia tendrá que llevarse a cabo antes de la firma del Acuerdo Final, es decir, los guerrilleros y las guerrilleras deberán validar lo alcanzado por la Delegación de Paz en La Habana y definir si damos el paso final o no. Es decir, nosotros tenemos mecanismos democráticos internos para la toma de decisiones, de definiciones, y a partir de allí llevamos a cabo la planificación de lo que vamos a construir en el escenario de posacuerdo.

Consideramos que nuestros principios, nuestro acumulado histórico van a seguir vigentes en ese escenario, pero que tenemos que cambiar nuestra forma de construir organización y de relacionarnos con otros movimientos y organizaciones de todo tipo. Pretendemos apostar a una política que siga siendo revolucionaria, transformadora, pero operada desde la construcción colectiva.

RK: ¿Entonces podríamos afirmar que sus militantes, por ejemplo, quienes

¹ Sin embargo, cabe señalar que para el momento en que se transcribió la entrevista, lo que pudimos conocer al respecto de las determinaciones de la X conferencia, si bien arroja claridades sobre este y otros puntos abordados a lo largo de la entrevista, en su mayoría siguen supeditados a otro evento interno de reconfiguración de la organización FARC-EP, al parecer de similar importancia: la conformación del nuevo partido o movimiento producto de los acuerdos de La Habana. En consecuencia, en Kabái optamos por no aventurar más comentarios al respecto e invitamos al lector interesado a consultar por otros medios las eventuales dudas que puedan tener frente a lo afirmado en la entrevista y lo ocurrido en el transcurso del tiempo.

hacen parte del Movimiento Bolivariano dejarían atrás la clandestinidad y se volcarían a hacer política abierta?

LC: Esa es una de las discusiones de la X Conferencia. Si bien en los acuerdos tenemos pactados compromisos en garantías de seguridad para quienes van a ejercer la política y quienes participan de los movimientos sociales, es sabido que venimos de un escenario de persecución, de presos políticos y de terrorismo de Estado. En ese contexto, el qué pase con nuestra militancia clandestina parte de una definición interna que tendrá que valorar tanto el salto que da la organización a la legalidad como las condiciones específicas de nuestro país. Lo que sí podemos asegurar es que todos y todas las combatientes de la organización vamos a pasar a hacer política abierta, con el compromiso de crecer en ese escenario mediante el aprovechamiento que pueda hacerse del acumulado producto de la educación de nuestros cuadros en la lucha clandestina y la guerra para la construcción de la unidad popular.

RK: ¿Qué papel va a jugar el PCCC (Partido Comunista Clandestino Colombiano) en todo esto?

LC: El PCCC sigue siendo nuestro partido guía, nuestro organismo político: toda escuadra guerrillera es a la vez una célula de partido, en donde los rangos militares no existen porque todos somos iguales en la estructura partidaria. En ese sentido, el tránsito a la legalidad, a la lucha política abierta, no tiene por qué implicar que los combatientes de las Farc-EP perdamos ese escenario democrático interno que es tan valioso y con el que se construye tanto para la organización. Ahora bien, frente a la presencia del PCCC en organizaciones de base, hablamos de algo similar al caso del Movimiento Bolivariano: el cambio es-

tructural o táctico que puedan tener dependen de las decisiones de la Conferencia.

RK: Hablando de lucha política abierta en el escenario político colombiano ¿Cuál es la lectura que hace las Farc-EP del posacuerdo?

LC: Nosotros no vemos el posacuerdo en la lógica propagandista del gobierno: la paz como un escenario de pasividad, como conveniencia, como coexistencia. Nosotros vemos por el contrario que el posacuerdo, en vez de generar un país en una suerte de aborregamiento, un adormecimiento de conciencias, es la oportunidad para que nuestra sociedad sea una sociedad deliberante, una sociedad donde haya conflictos sociales, donde los movimientos sociales sean respetados, donde las voces críticas sean respetadas. Y a partir de allí, nosotros tenemos en el campo popular, en las comunidades, en los sectores sociales, la responsabilidad de construir alternativas. Creemos que en los distintos movimientos ya hay un acumulado y lo que hay que hacer es multiplicarlo. Ahí hay una veta grande para las luchas del posacuerdo.

RK: En ese contexto ¿Qué entienden por participación política? ¿A partir de qué expresiones creen que se puede expresar esa participación?

LC: Hay una visión institucional en Colombia bastante negativa de la participación política, solo entendida como participación parlamentaria, como participación electoral pasiva. Nosotros la vemos muy distinta, por ejemplo, nos dicen “ahora ustedes sí van a hacer política” cuando las Farc-EP llevan 52 años haciendo política, construyendo tejido social en regiones donde el Estado nunca aparece, siendo una alternativa militar a las Fuerzas Armadas. Por cien mil razones estamos haciendo política. Asimismo, en Co-

lombia existen enormes formas de expresión política que tienen que potenciarse, que tienen que avanzar mucho más para la real politización del país. El acuerdo del punto 2 de apertura democrática, tiene mucho que ver con ello: la posibilidad de que los movimientos sociales se empoderen cada vez más, y romper con visiones como la del actual Ministerio del Interior: “¡ay sí!, existen movimientos sociales, es esta gente que hace paros” “¡ay sí!, hay un paro camionero, el problema es que subieron los alimentos”, pero no hay una institucionalidad que tenga en cuenta ese gran entramado social que existe, de esa gente que se está movilizándose permanentemente y que tiene visiones y apuestas de país. En el escenario de posacuerdo esto tiene que cambiar. Esto no es una invención nuestra, ni una idea traída de los cabellos: hace parte de las valiosas experiencias latinoamericanas recientes y tenemos que buscar un camino que las recoja.

RK: ¿De qué forma se piensa trabajar con las agendas de estos movimientos?

LC: Las Farc-EP no pretenden llegar a hacer vanguardia ni hegemonismo de ningún tipo, no pretendemos ser punta de lanza de los movimientos sociales, consideramos que tendremos que construir conjuntamente con el acumulado de los movimientos sociales en ese escenario de posacuerdo. Nuestro país tiene unas características muy distintas a los procesos de convergencia, de unidad popular latinoamericanos, y es que no estamos hablando de movimientos o partidos fuertes en un escenario de izquierda, de campo popular; por el contrario, tenemos movimientos que están en las regiones, construyendo a partir de una visión si se quiere, no partidaria. A partir de allí la construcción debe ser desde la base, teniendo las premisas de los acuerdos para abrir un horizonte por el cual el campo popular puede avanzar profundamente en el escenario político.

RK: Teniendo en cuenta la posibilidad que abre el acuerdo de la participación electoral y parlamentaria, ¿Cómo piensan combinar ese trabajo de la mano con las comunidades y los movimientos? ¿Se va a priorizar en alguno?

LC: Estamos seguros de que los combatientes de las Farc-EP no vamos a salir en el escenario del posacuerdo a ser un gueto dentro de la sociedad. Los hombres y mujeres de las Farc-EP saldremos a participar de las luchas sociales, a estar en los distintos espacios de nuestro país, a construir movimiento social, resistencia y unidad popular. Ahora, en ese mismo escenario, creemos nosotros que, entendiendo la importancia de los acuerdos, entendiendo que abren un camino hacia una apertura política, indudablemente también vamos a participar de los escenarios político-electorales, pero no priorizándolos ni subordinando toda la participación allí, sino entendiéndolo como una parte más de las luchas sociales.

RK: En el punto en que ya esté en curso la participación política y electoral, o por lo menos desde el momento en que las Farc-EP ya no cuenten con el blindaje que de cierta forma ofrecían las armas, no solo para los combatientes sino también para las comunidades con las que cohabitan ¿Habrán garantías para el desarrollo de la apuesta política que se están pensando, por ejemplo frente a la amenaza paramilitar o neo-paramilitar?

LC: La definición nuestra, entendiendo que aún hay muchos aspectos del fin del conflicto por acordar, es que nosotros no nos vamos de las áreas. Este no es un proceso como otros procesos anteriores, en donde se hace una experiencia de dejación de ar-

mas y a los excombatientes se les da para el transporte, una beca o un taxi. Aquí no estamos apostándole a una solución de ese tipo. Nosotros hemos estado construyendo tejido social y organizacional en las regiones desde hace mucho tiempo, hay incluso experiencias de participación y construcción comunitaria en los que las Farc-EP han estado por años y eso no lo pensamos romper ni perder. Vamos a estar en las comunidades, tenemos propuestas como las de los Terrepaz: territorios donde construimos conjuntamente, desarrollamos proyectos productivos y al mismo tiempo seguimos en la construcción de una alternativa organizativa popular. No vamos a abandonar las regiones.

RK: ¿Y ante la amenaza del paramilitarismo...?

LC: Efectivamente hay una amenaza fortísima en contra de este proceso, que es la representada por el paramilitarismo que está en todo el país. Creemos que hemos alcanzado acuerdos que son un primer paso frente al desmonte de ese fenómeno, donde se genera de cierta manera una institucionalidad alternativa y al mismo tiempo, la apertura de una gran deuda que tiene nuestro país: la construcción de verdad en torno al fenómeno paramilitar. Se habla mucho del paramilitarismo como algo que genera víctimas, pero no del qué, el cómo, el de dónde y el quién financia. Creemos que eso entra a romperse con el Acuerdo, con las garantías de seguridad y la Jurisdicción Especial de Paz. Ahora, no solo pensamos en medidas pasivas, debemos construir conjuntamente con las comunidades un escenario que no permita que el paramilitarismo siga afectando tan seriamente al campo popular.

RK: Paralelo a las negociaciones, el Go-

² Esta propuesta fue rechazada por el Gobierno, debido a la presión ejercida especialmente por el sector militar. Sin embargo y aunque se distancia de lo que aparentemente proponía esta insurgencia, a juicio de la Revista, algunas de sus ideas quedaron subsumidas en lo que son las Zonas Veredales Transitorias de Normalización.

bierno ha tramitado la creación de dispositivos jurídicos y políticos ¿Qué evaluación hacen de esta actitud?

LC: Efectivamente hay una apuesta política del Gobierno de, en el marco de los acuerdos, validar a través del parlamento una serie de apuestas políticas que son contrarias al espíritu de los acuerdos: caso Zidres, caso Nuevo Código de Policía, incluso temas jurídicos en donde se endurece la persecución a los Movimientos Sociales. Para nosotros no hay en el Acuerdo una especie de cese al fuego parlamentario, la autonomía tanto del Gobierno como de las Farc-EP frente a las políticas desarrolladas por el primero a lo largo de los acuerdos, ha sido la que cada uno desarrolle. De lo que si hay que hacer es un balance de lo que ha hecho el Gobierno al respecto, puede que no fueran puntos del Acuerdo pero sí los valoramos negativamente en tanto van en contravía de lo que aquí hacemos, y lo consideramos señas de la catadura política y moral de la bancada de gobierno. Frente a eso lo que hay que hacer es organizar la capacidad de parar esas iniciativas en un escenario de posacuerdo.

RK ¿Qué opinión le merece el Nuevo Código de Policía?

LC: El Nuevo Código es el establecimiento definitivo de un Estado represivo, policivo, que vigila y controla todo. No se ha tenido en el país la resistencia y lucha que frente a ese código se debió haber dado. Un código bastante lesivo frente a las libertades individuales, frente a las libertades ciudadanas, oponerse a él era tarea del campo popular. Esas políticas tienen que ser detenidas en el escenario político y depende de una correlación de fuerzas que hoy no tenemos.

Esa es otra discusión que nos debemos dar en el campo popular. Sí, hay un Nuevo Código de Policía, toda militancia de izquierda sabe que es malísimo, pero no nos da para organizar una movilización y frenarlo. La política real depende y opera bajo correlación de fuerzas, mientras no la cambiemos seguirán ese tipo de medidas.

RK: Las reformas a la doctrina militar ¿van en contravía de lo pactado?

LC: En el plano militar indudablemente hay valoraciones por hacer que son bastante graves. El tema del ESMAD, no solo su fortalecimiento y crecimiento, sino los casos que se vieron de un ESMAD que depende directamente del ejército, es algo que va en contravía frente al acuerdo de garantías de seguridad, frente a la intención de desmilitarizar la policía, de sacarla del Ministerio de Defensa y pasarla al Ministerio del Interior como ocurre en la mayoría de los países democráticos; o por ejemplo lo que ocurre en Cali, que la Infantería de Marina patrulla el río Cauca mientras que la lógica militar dicta que su función es ser la defensa anfibia de la Nación, pero ¿qué está haciendo patrullando la tercera ciudad del país? Nosotros no tenemos una postura de abolición de las fuerzas armadas, pero sí un cambio de sus prácticas, de sus doctrinas. En un escenario de posacuerdo, donde hay que llevar desarrollo y progreso a todas las regiones más apartadas del país, como está en los acuerdos, los batallones de ingenieros tendrían un papel preponderante por cumplir, pero en la práctica no vemos eso, los batallones de ingenieros son los más pobres y descuidados, mientras lo que se fortalece, a pesar de los acuerdos pactados aquí, es el componente contrainsurgente. Eso tiene que cambiar.

RK: ¿Por qué hablan de la democratización de los medios de comunicación? ¿Aporta esto a la construcción de paz?

LC: Uno de los grandes avances de los gobiernos posneoliberales o alternativos de América Latina ha sido dar pasos hacia ello, en especial porque cuando se han dado estos avances, han sido los grandes medios los situados en el bando contrarrevolucionario, en el sabotaje a estos gobiernos. Indudablemente tendremos que lograr cosas al respecto, pero creemos que es una de las grandes deudas del punto dos. Lo que avanzamos fue poco, no por falta de voluntad, sino porque la postura del Gobierno fue cerrada, e incluso cuando hacíamos propuestas al respecto, era casi que llegar a una de sus líneas rojas, las discusiones fueron fuertes. Hay que entender que los grandes medios están ligados al bloque de clase dominante, la vinculación de los grandes medios con las familias presidenciales o los grupos de poder representados en los gabinetes ministeriales no es coincidencia. El temor desde la institucionalidad es grandísimo.

RK: Lucas ¿Qué opina del Movimiento Estudiantil?

LC: En la historia de Colombia siempre ha habido una relación entre el Movimiento Estudiantil y los grandes sucesos y coyunturas políticas, creemos que este no es la excepción. La apertura del Proceso de Paz fue antecedida por uno de los periodos de movilización estudiantil más grandes que ha habido. En medio de cien mil dificultades y fraccionamientos, lograron echar atrás una propuesta del Ministerio de Educación y sentarse a negociar directamente. Creo que es un escenario de movilización que no se ha balanceado suficientemente, al menos en lo que merece.

RK: ¿Cómo creen que los estamentos de la Universidad pública deberían articularse al proceso de paz?

LC: Siempre hemos visto positivamente el acompañamiento de las comunidades universitarias, tanto de las Universidades públicas como las privadas. Han estado en foros, asambleas, convocando, trayendo y mandando propuestas, metidos en este debate nacional, y no solo el estamento estudiantil, sino toda la comunidad, eso es algo de agradecer. Sin embargo falta, no porque no se estén moviendo, sino porque desde la Universidad no se ven los acuerdos como una posibilidad. La visión sobre todo de las administraciones, parece entender los acuerdos solo como un gol: algo a saludar y celebrar, pero no algo a pensarse. Si cogieran digamos el punto de víctimas, el capítulo de justicia, solamente en ese escenario hay cien mil discusiones y debates que tendrían que ser abordados por las facultades de Ciencias Políticas o Derecho; hubieron universidades y centros de estudio de los EE.UU que adelantaron cátedras en torno al acuerdo de justicia, pero en Colombia no se ve de esta manera; o por ejemplo el reto técnico que implican para las facultades de agronomía el acuerdo de sustitución de cultivos ilícitos, o el que el punto uno prevea la formalización gratuita de todos los predios ocupados por el campesinado en el país, eso se dice en una frase pero ¿Cómo vamos a lograr eso? ¿Qué están planteando y proponiendo las Universidades del país?

Por último, el acompañamiento también ha sido de parte de movimientos latinoamericanos. La Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes (OCLAE), envió una comunicación pública a la mesa, planteando que todas las filiales en América Latina estaban al servicio de lo que la mesa necesite.

RK: ¿Cuán importante le parece la apuesta de la juventud organizada?

LC: Es determinante. Una fotografía de la movilización en Colombia mostraría que la

mayoría de quienes se están organizando son jóvenes, y hoy, un movimiento alternativo que pretenda la construcción de un mundo distinto tiene que atender esta realidad. Hay una consideración generacional sobre el conflicto y la urgencia de su fin: las dos contrapartes del conflicto son la última generación que vio los orígenes del mismo, es decir, las generaciones posteriores tendríamos el reto de continuar la guerra, de estar metidos en ella, sin haber estado presentes en su nacimiento y eso tiene unas consecuencias en lo que puede ser un nuevo escalamiento del conflicto.

RK: Si son determinantes ¿Debe la izquierda tomarse en serio a los jóvenes?

LC: Mi visión personal es que efectivamente una alternativa debe construirse en torno a estos escenarios y las izquierdas tenemos que ver autocriticamente que no lo estamos haciendo.

Por ejemplo, pudimos ver en el paro agrario de 2013 toda una población juvenil urbana del sur de Bogotá, que no tiene acceso a educación ni empleo, metida en una movilización directa y si se quiere espontánea, respondiéndole al Estado sin necesidad de una visión partidaria, organizada, orientada, sino que era gente que ante una coyuntura nacional, una movilización campesina y agraria en todo el país, salió a la calle y respondió, y no había un campo de las izquierdas construyendo el tejido social necesario. Ahí tenemos un reto grande, no las Farc-EP, sino el campo popular en su conjunto ¿Qué vamos a hacer frente a esta realidad? Una realidad donde la mayoría del país es urbano, pero además es joven, pero además no está en la universidad y por tanto no va a estar en el Movimiento Estudiantil, pero tampoco tiene un trabajo formal, entonces no va a estar en el Movimiento Sindical, pero no está metida en el debate ideológico, en el debate cultural,

etc; es decir, no está en ninguno de los que en la visión clásica de la izquierda eran los frentes de masas, entonces ¿Qué hacemos con esa juventud? Porque la politiquería, los partidos tradicionales sí saben qué hacer con ellos, los grupos neoparamilitares sí saben qué hacer con ellos. Ahí tenemos una discusión bastante fuerte.

RK: ¿Cómo llegar a ese sector despolitizado de la población, para que abrace y se enamore no del proyecto de las Farc-EP sino de la paz con justicia social? ¿Cómo motivar a las generaciones futuras? ¿Qué hay que decirles?

LC: De todo lo construido, hay una parte que en mi opinión es la más bonita, la más transformadora así sea solo un párrafo. Es una parte de la introducción de la Jurisdicción Especial para la Paz donde se dice que esto que estamos construyendo es una justicia prospectiva en tanto no es para quienes estamos firmando, sino que es para las generaciones futuras.³ Ahí es donde tenemos que entrar a socializar cuáles son los beneficios de la paz y ni el Gobierno ni Las Farc-EP hemos sabido hacerlo.

Los beneficios de la paz no son el ahorro en el gasto militar, ni el desarme de las Farc-EP, ni la victoria de un sector político sobre otro. El primer gran beneficio de la paz es la salida de la guerra de la gran mayoría de los que se matan en ella: la juventud de los sectores populares. Además, lo que hay que decir entonces, es que aquí tenemos una serie de garantías, una serie de oportunidades para que el país que tengamos en el corto plazo sea mejor y ahí tenemos que caber todos, por

ello las organizaciones juveniles tienen un espacio y un papel que jugar, pero entendiendo que esto es una cuestión de responsabilidad general. Tendemos en el campo popular a pensar que los acuerdos son algo que llega a solucionar nuestros problemas, y sí, lo son, pero lo son en tanto seamos capaces de apropiarnos, organizarnos y movilizarnos en torno a ellos, de lo contrario, seguiremos en las mismas. Eso hay que saber comunicarlo y esa no es una tarea exclusiva de las partes en negociación, ni de la Unidad Nacional, tampoco e un Frente Amplio por la Paz. Es una tarea de todos y todas. Ahora ¿cómo transmitimos que lo que estamos haciendo aquí es valioso? ¿Cómo transmitimos que esta apuesta es en últimas, la única posibilidad de construir un proyecto de nación a mediano y largo plazo? Ese es el reto.

Entrevista a Jesús Santrich:

Poeta bucólico, literato rebelde, comentarista directo, comunista polémico ¡en fin! Difícil de tragar para algunos e inspirador para otros, cualquiera sea el calificativo que se le aplique, no cabe duda que Seusis Pausias Hernández, mejor conocido por su nombre de guerra "Jesús Santrich", es uno de los miembros de las Farc-EP que más interés despierta. Establecimiento: La Cueva del zorro, fecha: 12 de julio de 2016, ciudad: La Habana, Cuba. Durante nuestro viaje a la isla, también tuvimos oportunidad de conversar con semejante representante de la mezcla árabe-caribeña, tan extendida en la costa atlántica colombiana.

RK: Desde la posición de las Farc-EP ¿Cómo hacer para que las instituciones sirvan a los menos favorecidos?

³ La cita completa versa "La Justicia es prospectiva en cuanto considera que una época influye ineluctablemente sobre las posteriores. Se trata de una justicia prospectiva respetuosa de los valores del presente y a la vez preocupada por acabar con conflictos que no deben ser perpetuados, en aras de la defensa de los derechos de las futuras generaciones" (Pág. 143).

JS: Hay que democratizarlas, tienen que salir de la hegemonía del Bloque de Poder Dominante. Nosotros desde el principio, en lo que ha sido una posición histórica de nuestra lucha política, hemos creído que deben hacerse cambios constitucionales, estructurales. Quizás algunos constituyentes intentaron lograrlos. La Constitución de 1991 hizo algunos avances importantes, pero a estas alturas se requieren otros más. La institucionalidad tiene que variar más allá de su adecuación para los Acuerdos, tenemos que procurar más presencia popular, más mecanismos de control, seguimiento, veeduría y sobre todo, de participación del Movimiento Social.

RK: Pero la Constitución está ahí desde hace más de 20 años, inmóvil en muchos casos y eso que sabemos tiene herramientas. Según las Farc-EP ¿Qué se necesita para que esos cambios necesarios se hagan efectivos?

JS: El mejor procedimiento es una revolución, pero para que haya una todavía falta un trecho largo, avanzar, construir, intentar. Ahora estamos buscando una alternativa desde estas conversaciones, ojalá sin más tiros, sin más bombas, sin más de sangre, y para nosotros es a través de la palabra, de ahí que hablemos de la necesidad de algunos cambios. El punto dos, participación política, reúne reformas al sistema electoral para que la participación sea efectiva, para que esté limpia de tanta corrupción, de tanta mediatización del dinero y que de verdad la gente pueda dar sus opiniones en el escenario electoral.

Sin embargo, se requieren cambios de fondo, por ejemplo a las tres ramas del poder público: sus instancias tienen que librarse de la parapolítica y el narcotráfico que las tiene cooptadas. Un caso como el del señor Jorge Pretel, quien ha despojado

tierras en Montería, no puede estar fungiendo como máximo dignatario de la Corte Constitucional. Estamos en manos de una burguesía gangsterizada, una oligarquía lumpenizada y pensamos que lo único que puede cambiarlo es una amplia participación de las masas populares, por ejemplo en los escenarios que pretendemos abrir.

RK: A propósito de nuestra clase dirigente ¿Qué piensa de las contrarreformas que, con aprobación del Gobierno, ha venido adelantando el Congreso, y que son contrarias a lo pactado en La Habana?

JS: Eso es como lo que dijo Ernesto Che Guevara, guerrillero de Nuestra América respecto al imperialismo, acá lo aplico respecto al Congreso, “no se le puede creer ni tanto así”. Es decir, si llegamos a dejar la implementación de los Acuerdos en sus manos en la mañana los presentamos y en la tarde los tienen vueltos nada, léase vueltos mierda. En eso tenemos que ser realistas, por eso decimos que la fuerza vinculante de lo acordado no se reduce al compromiso del Gobierno en la mesa, sino que requiere de apoyo popular y de desarrollos normativos previos, al menos en sus marcos de interpretación generales, a fin de evitar que se los desbarate en un Congreso que solo funciona con mermelada.

Para darte un ejemplo, nosotros hablamos insistentemente de firmar lo pactado como Acuerdo Especial. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, los conflictos internos, y el de Colombia es uno, se regulan no por la legislación interna sino por normas del DIH y esa figura está dentro de ese parámetro, lo que lo hace perfectamente aplicable. Es más, antes de las firmas en presencia del Comandante Raúl Castro y del señor Santos (evento del 23 de junio de 2016), nosotros firmamos un acuerdo en el que el Gobierno

se comprometía a reconocer el carácter de Acuerdos Especiales y vincularlo al Acto Legislativo que estaba en curso en el Congreso, pero ahí nos trampearon. Después de ese compromiso, ellos redactaron el artículo quinto de ese Acto, en una carrera para darle fuerza al famoso Plebiscito y supeditar todo lo acordado a una refrendación que se dará dos meses después de la firma del Acuerdo Final. Eso trae una serie de inconveniencias, por ejemplo, provoca un traslape del tiempo necesario para programar la consulta con el cronograma acordado para la dejación de armas que en un principio iniciaba el día después de la firma o D+1, pero ahora tendrá que esperar los resultados de la votación. Además, en caso de obtener un sí, la dejación tampoco podría iniciar inmediatamente después de los resultados porque todavía faltaría la Ley de Amnistía, la cual requiere a su vez ser aprobada por el mecanismo Fast Track que re-

cién ahí iniciaría, ese tipo de enredos que propone el Gobierno hacen que nosotros no podamos hacer efectiva la dejación.⁴

RK: No todo el mundo aprueba esta negociación, no tanto porque rechace lo que se está haciendo aquí, que de hecho la mayoría desconoce, sino por la imagen negativa que tienen las Farc-EP ante ese sector. De cara a ese primer escenario de medición en las urnas ¿Cómo llegar a esas personas?

JS: La pedagogía de paz es una empresa débil, muy débil y que tiene en frente la pereza mental, la desarticulación del movimiento social y la falta de apropiación. Uno habla con la gente y no se han leído los acuerdos, sino que conoce la noticia que se da y la noticia ya viene tergiversa-

⁴ Cabe recordar que desde antes habían inconformismos acerca de esta medida y después quedó en evidencia la veracidad de estas preocupaciones. En primer lugar, la refrendación popular era innecesaria si se parte de recordar que la reelección de Santos se dio en un contexto de apoyo a la salida negociada, cuando incluso sectores detractores de la administración del susodicho optaron por fortalecer su reelección ante la posibilidad de victoria del contrincante Oscar Iván Zuluaga, quien como candidato del Centro Democrático, aseguraba que en caso de ser electo volvería a la vía guerrillera reactivando la Seguridad Democrática. En segundo lugar y acá el lector sabrá disculpar la extensión, desde 2015 y en medio de lo que se presentaba como lo que sería una aplastante victoria de la Paz, se había anunciado que la función del plebiscito era fortalecer el proceso buscando que a su decisión se sometieran por mandato popular simpatizantes, opositores, Gobierno y Congreso, por lo que se le asignó un carácter vinculante, siempre y cuando alcanzara una aprobación o rechazo de un 13% (4,4 millones) del Censo Electoral para hacerse efectivo, un margen inferior a la tradicional “mayoría” (alrededor de 17 millones) estipulada por la legislación colombiana para estos casos, sustentando tal excepción en una “visión pragmática” de la democracia colombiana ante elecciones atípicas.

Más que abrir márgenes de posibilidad al Sí (siguiendo lo afirmado ya se había manifestado con 7,78 millones de votos en 2014) lo hacía a un NO con “inesperables” posibilidades de lograr grandes cifras ya que tenía que hacer frente a la polémica ¿Una victoria del NO significaba el fin del proceso y por tanto un NO a la Paz? Para el momento en que se llevó a cabo la votación, La Corte Constitucional había sostenido el umbral de aprobación/rechazo y el carácter vinculante, pero había restringido la obligatoriedad de su acatamiento al Gobierno (con lo que dejó evidencia de que la negociación no se había hecho con el Estado sino con su ala ejecutiva) y había señalado que la Paz no era plebiscitable, por lo cual lo que se estaba votando era el contenido del Acuerdo y el Acto Legislativo 01 de 2016 que habilitaba el Fast Track, otorgaba facultades especiales al ejecutivo y elevaba a Acuerdo Especial lo pactado. Al final ni la pregunta apuntó a lo que se estaba buscando, ni la pedagogía fue suficiente, ni el rol de las partes o de la naturaleza los representantes del Sí y del NO fue clara, ni las decisiones que se tomaron a raíz de los resultados fueron coherentes: ganó el NO pero el Sí también superó el umbral, así que se abrió espacio a una renegociación del contenido entre el Gobierno y los “representantes del NO” curiosamente coincidentes en su mayoría con próximos candidatos presidenciales de la derecha más fanática, mientras que “como reconocimiento a las históricas movilizaciones en apoyo a que no se diera marcha atrás” se aprobó lo que “originalmente” se votaba: el Acto Legislativo, con excepción del artículo 4°, el que elevaba a Acuerdo Especial lo pactado. Por lo anterior y teniendo en cuenta los incumplimientos en lo que va de la implementación, es que quisimos incluir las sospechas y advertencias que hacía Seusis Pausias Hernández, a pesar del tiempo transcurrido.

da, se nota incluso cuando hablo con los periodistas y no tienen idea de lo que están preguntando. Eso me parece de lo más complicado, pero a pesar de la desinformación, hay un inmenso clamor nacional por la paz. La gente puede andar mal informada pero tiene una malicia indígena que le indica cuál es el camino y que debe apoyar una salida negociada, dialogada, a esta terrible confrontación que ha vivido el país durante tantas décadas ¡Habría que informar más! y hoy en día hay muchos medios, tradicionales y modernos. Lo que pasa es que aunque algunos medios están en manos populares, la mayoría está en manos de los grandes monopolios de la “comunicación” o la desinformación.

La máquina mediática es un actor principalísimo de la guerra. Tú aquí escuchas a las grandes cadenas, a RCN, a Caracol, a grandes medios como Semana, El Tiempo, El Espectador, exigiendo que pidamos perdón, convirtiéndose en los jueces, en los grandes tribunales para el juzgamiento de lo que ha sido esta confrontación, pero ellos han sido mampara de la tragedia nacional y de sus verdaderos genitores que están en el seno del Estado y más allá, en el Bloque de Poder Dominante.

¿Estos medios le van a pedir perdón al país? ¡Están en mora de hacerlo! Entonces es quizá la batalla más difícil que tenemos, la batalla por las ideas. Efectivamente hay un control cultural, un monopolio de la información y a nosotros nos toca pelear contra la corriente, tenemos instrumentos muy débiles todavía. Tenemos que buscar diversas alternativas, hacer el trabajo de la pulga, de la hormiga, del comején: irnos metiendo aquí y allá. Tenemos que meternos a través de las artes, de la cultura, de la música, del cuento, de la palabra, llegar de la forma más sencilla y simple: casa a casa, persona a persona, simplificando la información si es el caso, pero luego dándole forma, dándole contenido.

RK: Considerando esa pedagogía en el hábitat en que nos movemos quienes conformamos la Revista Kabái ¿Cuál piensa que es el papel de la Academia en el posacuerdo?

JS: Ahí hay un problema y es que la Academia no es algo monolítico. Quizá es el lugar en donde más aristas, más vetas tiene la democracia. Eso hay que aprovecharlo. Dentro de la Academia hay sectores muy importantes: es donde el sector juvenil se mueve con mayor generación de ideas e iniciativas como la de ustedes, lo que constituye una herramienta muy poderosa que hay que potenciar.

Pero para potenciar la Academia hay que salir del campus universitario, hay que expandirlo hacia los escenarios sociales donde tienen que irrumpir como fuerza de cambio. Asimismo, hay que tratar de integrarse, coordinarse y articularse entre los sectores de profesores, trabajadores y administrativos, así como con la fuerza de punta que es la juventud, y dentro de ella resaltar el papel de la mujer: el movimiento juvenil y el movimiento estudiantil tienen que aportarle mucha fortaleza y estructura al movimiento de las mujeres si es que queremos hacer un verdadero cambio revolucionario en Colombia.

RK: ¿Por qué el hincapié en las mujeres? ¿Tiene algo que ver con la experiencia de las mujeres en las Farc-EP?

JS: Sí, pero no te voy a hacer la historia de justificaciones de eso. En la experiencia guerrillera, quienes con más pasión y responsabilidad empuñan las armas y las tareas y las sacan adelante, son las mujeres. Más allá de que se trate de escenarios de mentalidad abierta y de cambio como los campamentos, en los que de todos modos hubo problemas de marginalidad y

discriminaciones, en medio de esas circunstancias las mujeres sobresalen en su compromiso ¿Qué tal si elimináramos esas barreras? ¿Qué tal si replicamos eso en el mundo exterior? En últimas mucha de la carga que ha significado la guerra, los desplazamientos, la degradación, ha recaído sobre las mujeres. El poder de resistencia, de responsabilidad y de cambio que tienen las mujeres es muy grande y eso no se puede desaprovechar.

RK: En ese contexto ¿Qué hay de una pedagogía del conflicto? Es decir ¿Cómo lograr una memoria histórica que amplíe el espectro de interpretaciones y en esa medida posibilite una paz con justicia social?

JS: Lo más difícil siempre son los “cómos”. Se pueden hacer los diagnósticos y definir los propósitos, pero lo más complicado, pienso yo, son los “cómos”. Nosotros sabemos que hay que generar una mentalidad de cambio, sabemos que hay que tratar de mantener la memoria histórica, pero hacerlo cuando hay otros que desde el poder hegemónico lo que quieren es borrar del mapa, esa es otra lucha y es del orden ideológico.

Lo fundamental es que no desconozcamos la historia: en estas conversaciones insistimos mucho en crear (mientras debatimos el punto de víctimas que duramos año y medio discutiéndolo), no solamente una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad sino que dijimos que esta confrontación tenía unas causas, unos orígenes, unas raíces; mientras el Gobierno insistía en no poner el espejo retrovisor sino en mirar para adelante, eso sí, sin olvidar los errores de la guerrilla, claro está...

RK: ¿Solo de la guerrilla?

JS: Solo de la guerrilla. Nosotros negamos esta posición del Gobierno, y de ahí nació la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas (CHCV), fruto de un gran debate con el Gobierno que al final accedió a su creación. Como sabrán, la protagonizaron 12 reconocidos académicos e investigadores designados a mitades por las partes, y construyeron, junto con sus respectivos relatores, el relato histórico de lo que ha sido el conflicto. Para nosotros ese relato tiene que ser un insumo fundamental para la Comisión de la Verdad y tiene que difundirse para la pedagogía y la enseñanza de la realidad nuestra a futuro: en las escuelas, en los colegios, en las universidades.

Sin embargo el Gobierno se ha opuesto a eso y ha querido enterrarla ¿Por qué? Porque a pesar de que entre los informes hay visiones encontradas, la historia también tiene su acento ideológico y la historiografía colombiana está muy tergiversada. De fondo está la gran responsabilidad del Estado como genitor de esta guerra y como el factor que ha mantenido las causas que hacen que la confrontación no cese. Entonces ahí hay un cuestionamiento, un enjuiciamiento al Estado. Esa memoria, creemos nosotros, hay que multiplicarla, hay que difundirla. La mejor manera de cambiar la mentalidad y que esa nueva mentalidad se convierta en un factor revolucionario, es manteniendo y multiplicando la memoria porque un pueblo sin memoria y sin historia está condenado a la manipulación de quienes estén en el poder independientemente de quien sea.

RK: Pero ustedes ¿cómo sienten esa comisión? ¿La ven como una victoria o están esperando a que se empiecen a esclarecer los hechos y conocer los culpables? Porque no podemos decir que hay un solo culpable del conflicto.

JS: El máximo responsable del conflicto es el Estado, lo he dicho, lo repito y lo sostengo, y dentro del Estado, el Bloque de Poder Dominante, que es el que ha generado las condiciones de miseria, de desigualdad y de exclusión política. En estos libros de la Comisión Histórica está muy bien sustentado; más allá de situar otros responsables.

Nosotros como organización insurgente, como pueblo que ha ejercido el derecho a la rebelión contra un régimen injusto, claro que también tenemos responsabilidades. En una guerra de más de medio siglo, son muchos los errores y las faltas e incluso los niveles de degradación que se alcanzan. Pero insistimos en que ante el sostenimiento de condiciones de vida indignas impuestas por el Estado, las demás responsabilidades son derivaciones existentes por ese hecho, de ahí deriva la confrontación. Esta no es una guerra de porque sí. Sobre eso es que se planteó la necesidad de una Comisión de la Verdad sostenida por los insumos de la Comisión Histórica. El diseño de la Comisión de la Verdad nos parece adecuado y correcto. Ahí hay la posibilidad de que todo el que quiera pueda llegar a expresar sus exigencias, sus puntos de vista y se pueda llegar a decir la verdad.

Nosotros le hemos dicho al Gobierno: tenemos el máximo compromiso de aportar verdad, de manera amplia, exhaustiva, suficiente. Ahora, el Estado tiene que hacer lo mismo, su agentes tienen que hacer lo mismo: no seguir con el negacionismo. No puede ser que a estas alturas, el Estado, sus agentes, sus voceros, sigan negando que en Colombia hay paramilitarismo. Dan 20 vueltas y para llegar a un acuerdo tenemos que usar eufemismos, que lo que existen son bacrim o son bandas sucesoras del paramilitarismo. Bueno, listo, vámonos por el eufemismo, pero investiguemos el tema. Aún así, la Comisión de la Verdad nos parece bien diseñada.

Ahora, en el punto de víctimas, en específico la sección sobre la verdad, se creó un sistema integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición. En ese sistema, en el punto de justicia hay lo que se llama la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz. Ese es un gran logro y en cierta forma es el cuestionamiento absoluto al sistema judicial colombiano, sencillamente porque el Estado aquí no puede ser juez y parte. No nos íbamos a subordinar al Acto Legislativo de 2012 que creaba el Marco Jurídico para la Paz, donde se pretendía que la guerrilla fuera al banquillo de los acusados y aplicarnos el derecho penal del enemigo.

Aquí no vinimos a someternos sino a llegar a un pacto de reconciliación, pero también de solución de los problemas que han generado el conflicto. La JEP brinda ese escenario, aquí no se va a hacer un juzgamiento de la guerrilla sino que se parte del reconocimiento del delito político y del derecho a la rebelión. A partir de ahí se define que debe haber una amnistía como dice el Protocolo de Ginebra: a la firma de la cesación de las hostilidades, la amnistía más amplia y con las más amplias conexidades. Aspiramos a que sea bien resuelto.

Ahora, si hay delitos no amnistiabiles ahí actúa la JEP, tanto como racero para los agentes del Estado, como para todos los que participaron de una u otra forma de la confrontación: aquí hubo actores no armados pero mucho más peligrosos que los armados, por ejemplo el capital financiero y los cacaos económicos del país que han puesto el territorio nacional en manos del latifundio ganadero, o que quieren mantener el poder sobre la tierra para extranjerizarla o para convertirla en macronegocios agroindustriales, pero no para alimentar al país sino para generar biocombustibles y exportar hacia otras latitudes, esos que no quieren la paz porque por el contrario han atizado y se han beneficiado de la guerra.